

Nº 672
26
Agosto
2022
Viernes



Hablando del teletrabajo

Emilio Álvarez Frías

Últimamente se habla cantidad del teletrabajo, cuestión laboral que se disparó con ocasión del coronavirus. Entonces, aquellos días de desconcierto, desorganización, desajustes, desgobierno fundamentalmente, si no todo el mundo laboral, pues ello no es posible, una gran parte del trabajo que igual se podía realizar en una oficina que en cualquier otro lugar teniendo



en cuenta las facilidades que la informática había otorgado, salió de los centros tradicionales del empleador para ser realizado en la casa del empleado, en un local emplazado a kilómetros de distancia y, si se aprieta un poco, en un campirg a la orilla del mar. No sé si con ello se consideró que se había resuelto un problema importante, porque, junto a

este ajuste laboral se ponía en marcha que las personas que tuvieran la necesidad de solucionar una dificultad bastaba con que se pusiera en contacto con determinado número telefónico –que en la práctica se segregaban en dos, cuatro, seis números...– obligando a permanecer pegado al teléfono un tiempo indeterminado sin la garantía de que, al final, alguien te atendiera, pues lo más frecuente es que la llamada se cortara durante la espera o te dijera una grabadora que no te podían atender en ese momento.



Complementariamente surgió que, para cualquier consulta pública incluso también privadas, tenías que pedir cita mediante la obtención de un número, lo que en muchas ocasiones era un juego del absurdo, pues a mí me obligaron, para que me dieran una cita en la Seguridad Social, que fuera a pedirla al centro donde me tenían que atender, me la dieran para el siguiente día, con lo que tuve que volver el día que me marcaron a la hora señalada, mientras veía que la mitad del personal existente estaba desocupado (aunque resultó más complejo de cómo lo cuento).

Traigo a colación el tema porque, hace unos días, la presidente del Sindicato de Inspectores del Trabajo, Ana Ecoreca, trataba de informarnos, a través de la televisión, sobre las diez claves que ha aprobado recientemente el gobierno para regular el teletrabajo, aunque no nos decía nada respecto a la atención de los españoles en los organismos públicos, por los que todos nos vemos obligados a pasar un montón de veces, a lo largo de nuestra vida, pese a nuestro deseo.

Es cierto que quienes tienen que dedicarse a realizar análisis biológicos o cómputo de datos genómico, lo pueden hacer en cualquier lugar, como lo hace un nieto mío que trabaja desde la sierra de Madrid para una empresa



con sede en el norte de Alemania; o un compañero suyo que ha decidido irse con una caravana a un camping de la Albufeira, en el Algarbe portugués. Y cumplen su trabajo al pelo con la empresa germana que los tiene contratados. Pero si yo tengo que solucionar un problema ante un organismo del estado, el correspondiente de una comunidad o en un ayuntamiento, no tengo más remedio que ir allí, contarle mis problemas al funcionario y que él me dé la salida adecuada. Y me lo tiene que solucionar vivencialmente, pues se lo he de explicar en ex-

tremo, quizá rellenar un formulario, pagar una cuota y volver otro día a por la resolución. Y esto, creo yo, se les ha olvidado a nuestros cerebros creadores de la Agenda 30. Un caso más evidente es el de la asistencia sanitaria; no es suficiente nos asistan por teléfono contando al facultativo malamente lo que sentimos, –pues no somos profesionales del tema–, pues seguramente él ha de auscultarnos, mirarnos a la cara, enchufarnos una luz a un ojo, y un sinfín de cosas que por teléfono no se puede hacer. Y por ende, este gremio te ha de atender personalmente y, en consecuencia, hay que dotar a los centros hospitalarios y consultas médicas de especialistas en función de los porcentajes adecuados a la población que tienen asignada; más, naturalmente, un complemento en función de los inmigrantes que pululan por aquella zona y que casi tienen preferencia en ser asistidos prioritariamente para que no se quejen.

Por lo tanto, que el señor Sánchez se deje de seguir poniendo en marcha más decretos dado que todos son profundamente defectuosos al carecer de los estudios técnicos correspondientes, de profesionales documentados que no tienen nada que ver con la bazofia de la que él se acompaña como asesores.

Como los portugueses son nativos de la península Ibérica y hemos vivido la historia a revuelo desde hace muchos siglos, también tuvieron la oportunidad de mamar las aportaciones que nos dejaron los fenicios cuando se asentaron en la costa andaluza, con influencia asociada a los Tartesos. Es más, se atribuye a los tirios la fundación de Gadir (actual Cádiz), por lo que no es difícil se dieran una vuelta por la Albufeira, a un tiro de piedra. Y aprenderían juntos

a amasar el barro para crear botijos. Razón por la cual, pasando el tiempo, el amigo de mi nieto nos ha enviado una pieza de aquellas tierras del Algarbe con la figura del célebre Gallo portugués, cuyo origen se debe a la leyenda del peregrino a Santiago que se detuvo a descansar en una posada en la que moraba una moza que se enamoró de él, y que, al rechazarla, le culpó de haber robado por lo que fue condenado a la horca; mas como última voluntad pidió ser llevado ante el juez, quien, estando comiendo un gallo, le concedió que si el gallo cantaba antes de que muriera en la horca, quedaría libre. Y se salvó el peregrino. Como esperamos salvarnos nosotros en esta querida España, pues el gallo portugués cantará junto con el de Morón de la Frontera, gallo que también tiene su historia.



* * *

A Feijóo se le ha puesto cara de Ayuso

«Disparen sobre Feijóo», la campaña estival ingeniada desde Moncloa, se ha convertido en un colorido escenario que evidencia la escasa habilidad de las alegres ministras del sanchismo en el arte de injuriar

José Alejandro Vara (*Vozpópuli*)

Este agosto político ha sido un slapstick de tercera, uno de aquellos filmes de tortazos y trompadas en el que a Feijóo le ha tocado el papel de Stan Laurel, el flaco que se llevaba todas las bofetadas. Tantas le han dado que hasta se le ha puesto cara de Díaz Ayuso, especialista en aguantar los guantazos del Gobierno desde hace dos años. El líder gallego empieza ya a conocer cómo se las gasta el socialismo, siempre con la palabra «crispación» en la boca mientras arrea, hostiga, insulta y persigue a la oposición. Norma de la casa. Desde el «tahúr del Missisipi» contra Suárez al dóberman



contra Aznar, la izquierda no ha cesado en el dicterio y la calumnia. A Rajoy lo insultaron menos pero lo echaron de la Moncloa mediante una frase aviesa en una sentencia tendenciosa.

Los voceros de guardia de la Moncloa tan sólo han abierto la boca estos días para zaherir al gallego tranquilo. Una especie de lapidación verborreica que aterrizaba en los límites del ridículo. La última en llegar, este mismo lunes, ha sido Isabel Rodríguez, con su oratoria torturada, más próxima a una miliciana manchega que a su cargo de portavoz del Ejecutivo. «Insolvencia, inmadurez, cinismo. España le viene grande. Se ha equivocado de plaza». Que una modesta exalcaldesa periférica le reproche ignorancia en la gestión a quien tiene los cuartos traseros pelados después de cuatro legislaturas al frente de una comunidad es una bromita infantil.

Pilar Alegría, nueva imagen verbal de la formación, amén de ministra de Educación, ha sido la más insistente en los tortazos, ejercicio que ha compartido con otras grandes oradoras como Nadia Calviño, arrollada por la inflación o una Diana Morant, asfixiada en su propia inepticia. El chapucero Félix Bolaños, consagrado como responsable de tres severos patinazos del Ejecutivo (Reforma laboral, Pegasus y CNI-secretos oficiales) fue más allá al filtrar el acuerdo con Teodoro García Egea sobre mangoneos de togas y puñetas. Política de callejón, desesperada zancadilla.

En los pasillos de Ferraz se palpa un silencio como de avenida de cementerio, diría Pla. No es la calma del estío. Es un efecto que se instaló en el cerebelo del PSOE tras el destrozo andaluz. El malestar crece conforme avanza el calendario hacia el superdomingo de mayo. La estrategia de los 800 asesores de Moncloa se considera incierta. El decreto de medidas de ahorro energético es una chapuza impuesto a martillazos. Ahí, en su desprecio a la negociación y el diálogo, Teresa Ribera sí se ha investido como la auténtica excepción europea. Los precios devoran los hogares, los recibos de la luz y el gas son una película de terror, la vuelta al cole se adivina un espanto y el otoño llega con los ropajes del monstruo de Dop, la aterradora película de la temporada.

Arremeter contra Feijóo puede ser un entretenimiento ameno aunque políticamente ineficaz. Evidencia el nerviosismo que se ha instalado en las filas del progreso, una especie de incontrolada tensión que ni siquiera el líder totémico de la tribu, quijada de granito, conciencia de amianto, es capaz de apaciguar. Cuando Sánchez aprovecha su visita a La Palma, la isla mártir, para tachar de «intoxicación» las informaciones periodísticas que avanzan crisis de Gabinete, manifiesta que su pétreo displicencia, su distante arrogancia, empiezan a resquebrajarse. No será candidato a las generales, lo sabe todo el mundo en su partido, pero le fastidia aparecer como un derrotado *avant la lettre* en este pulso abierto con Feijóo, a quien considera un caciquillo de provincias que no aguanta medio sopapo.



Los sondeos lo contradicen, el clima social lo desmiente, los vientos de cambio destrozan esa versión. Ha lanzado la operación «disparen sobre Feijóo» por ver si frena su avance demoscópico y lo ha hecho con tan escasa habilidad que incluso alienta las bromas del nada irónico Bendodo, número dos del PP: «Están a punto de crear el ministerio número 23 dedicado tan sólo a insultar a Feijóo». La factoría de Ficción de la Moncloa se muestra incapaz siquiera de repartir un argumentario certero y venenoso para que lo reciten sus candorosas ministras con una cierta solvencia y un relativo entusiasmo. Son todas más sosas que la chica aquella del Euromillón.

Cuando intentan responder los comentarios del inmutable gallego sobre el Falcon, los referéndum ilegales, los impuestos desbocados o el oscuro deve-

nir económico, lejos de herirle, refuerzan su perfil, jalean su imagen, potencian su liderazgo. En su retahíla de disparatadas afrentas han llegado a tachar de «extremista» al presidente popular, algo así como tildar de «valiente» a Marlaska. Ayuso, que también recibió lo suyo, emergió reforzada de una macedonia de insidias tan desprolija como similar. Nada han aprendido en Ferraz.

Feijóo abrirá el día 2 el curso político en Alcalá junto a la lideresa madrileña. Mientras robustece la estructura de su partido y ultima sigilosamente las bases de su proyecto político, descuenta sin ansiedad los días que separan al sanchismo del inevitable precipicio.

* * *

¿Qué pasará en el año 2030?

Álvaro Rodríguez (*El Manifiesto*)

Cada vez está más cerca. Cuando se hacen pronósticos a largo plazo, parece que las fechas fijadas siempre están lejos, pero inexorablemente los años van pasando y las fechas van llegando. Así está ocurriendo con los proyectos para el año 2030. Proyectos que se hicieron uno en el año 2015 y otro en el año 2021.

No confundir. En el año 2015 la ONU, una vez visto que no se habían logrado



los ocho objetivos del milenio que se habían formulado en el año 2000 y que debían haberse cumplido en 2015, redactó nuevos objetivos –esta vez nada menos que 17– y fijó quince años para su logro: en el año 2030.

Por su parte, el Foro Económico Mundial (WEF), en su reunión en Davos en enero de 2021, fijó ocho

objetivos para el año 2030. Coinciden ambos proyectos en el año de finalización, pero se trata de dos conjuntos de objetivos muy diversos

No está de más dar un repaso a los proyectos para el año 2030, independientemente de lo que digan en nuevas reuniones en Davos.

Como se dice más arriba, no hay que confundir los dos proyectos, porque a veces se tratan las dos agendas 2030 como si fueran una misma cosa y nada más lejos de la realidad, aunque ambas pretenden –eso dicen– lograr un mundo mejor.

Como enumerar y comentar todos los objetivos propuestos por ambas organizaciones resulta fatigoso, vamos a destacar solamente algunos de ellos –altamente significativos– para orientar el pensamiento.

Así de los 17 objetivos de la ONU destacaremos:

- Fin de la pobreza

- Hambre cero
- Salud y bienestar
- Educación de calidad para todos
- Igualdad de género

Y así siguen hasta los últimos, que hacen referencia a los ecosistemas terrestres y a la paz y la justicia.

Indudablemente son objetivos que de cumplirse conducen a un mundo mejor.

También los del Foro de Davos dicen que conducen a un mundo mejor, pero no se desprende claramente de sus enunciados, de los que destacamos:

- En 2030, no tendrás nada y serás feliz.
- Comerás menos carne para el bien del medio ambiente y de tu salud
- Te estarás preparando para viajar a Marte.

Ninguna referencia a los objetivos de la ONU. Con sólo los tres enunciados ya se ve que son agendas muy distintas.

¿Qué pasará en el año 2030? Parecía lejano, pero ya está cerca. Si cada uno pudiera influir en el cumplimiento de los objetivos, no cabe duda que primero habría que lograr los objetivos de la ONU y después ya podríamos pensar en viajar a Marte.

Ahora, a mediados del año 2022, los de Davos amplían sus predicciones hasta 2100. Muy lejos queda eso para tomárnoslo en serio.

* * *

El feminismo clásico, harto de Irene Montero, pide ayuda a Feijóo

La Alianza contra el Borrado de las Mujeres ha pedido una reunión de trabajo con el presidente del PP

Su objetivo es hacerle llegar «las problemáticas» que, a su juicio, derivarán de la Ley Trans impulsada por el Ministerio de Igualdad

José Barros (*El Debate*)

La entidad *Alianza contra el borrado de las mujeres*, Alianza CBM, ha reclamado un encuentro con el líder del PP después de unas declaraciones realizadas por el dirigente «popular» en las que ha asegurado que, si su formación llega a la Moncloa se derogarán varias leyes, entre ellas, la Ley Trans.

Desde la Alianza CBM, conocida también coloquialmente como *ContraBorrado*, advierten de que, en aquellos países que se ha puesto en marcha una norma similar, se está produciendo la sustitución del concepto «sexo» a través del uso del concepto «género» como sinónimo lo que, a su juicio, «comporta una multiplicidad de problemas en ámbitos como el de la estadística, el deporte femenino, la representación paritaria entre mujeres y hombres, la libertad de expresión, los espacios de seguridad para las mujeres, la salud y, particularmente, su impacto sobre la infancia».

A través de un comunicado, la organización ha indicado que en los últimos dos años ya habían enviado solicitud para reunirse con los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso, así como con la presidencia del Gobierno.

Su objetivo, tal y como han destacado, es que el texto de la ley Trans tendría consecuencias sobre la Ley de Violencia de Género, la Ley de Igualdad, la Ley del Deporte, la Ley Electoral y «otras 30 leyes, incluidas algunas orgánicas».

Feijóo declaró en una reciente entrevista que, de llegar a la presidencia del Gobierno de España, el PP «por supuesto» derogará varias leyes del Gobierno actual como la Memoria Democrática, anunciando acto seguido que «Las políticas educativas las tenemos que cambiar; en la Ley Trans no están de acuerdo ni las feministas ni los colectivos a los que van destinados; es un planteamiento exclusivamente ideológico de una parte minoritaria del Gobierno que se impone a la sociedad española».



Malestar feminista con Montero

Varias asociaciones feministas mostraron nada más conocerse su rechazo a la Ley Trans aprobada en segunda vuelta por el Consejo de Ministros el pasado junio, advirtiendo al Gobierno de que «registrarse como mujeres no es un derecho de los varones».

«Porque las leyes trans nos borran a las mujeres, hormonan y mutilan a la infancia y son las verdaderas terapias de conversión», han denunciado desde la Confluencia Movimiento Feminista, que ya se movilizó en diferentes ciudades de España en contra de esta norma y en favor de la «agenda feminista».

También ha mostrado su rechazo a este texto la Asociación Española de Feministas Socialistas (FeMeS), una organización entre las que se encuentran algunos excargos de Igualdad en anteriores gobiernos socialistas.

De forma similar se ha expresado el Movimiento Feminista de Madrid. «Manipular a la infancia con estereotipos sexistas no es ningún progreso, la censura al pensamiento feminista tampoco lo es», han explicado en este sentido.

El CGPJ considera que la Ley Trans puede discriminar a las mujeres

La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres celebró el pasado abril la decisión del Consejo General del Poder Judicial de eliminar de su informe final la «insultante expresión “mujeres no transexuales”», así como también aplaudió que CGPJ «también considere que la ley trans discrimina a mujeres».

Según señaló a través de un comunicado, la Alianza CBM ha elaborado un documento de análisis a dicho informe del CGPJ, que señala los aspectos que susciben y aquellos que rechazan las organizaciones de mujeres «por dar carta de naturaleza legal a la discriminación por razón de sexo».

En este sentido, entre las conclusiones de la propuesta de informe, la Alianza



CBM considera positiva la afirmación del CGPJ de que el Anteproyecto «propicia el indeseado efecto de generar situaciones de discriminación para las mujeres». Asimismo, han puesto en valor que se elimine el concepto «mujeres no transsexuales» ya que «deshumanizaba» y «negaba implícitamente la existencia del sexo biológico, convirtiendo la excepción en regla y permutando la ficción jurídica con la realidad», han dicho.

tando la ficción jurídica con la realidad», han dicho.

De la misma manera, la Alianza CBM ha destacado que se señale que los menores de edad «no deben poder cambiar de sexo mediante mera comparecencia en el registro», sino que tendrán que contar con autorización judicial. «Este procedimiento busca proteger al menor, acreditando su madurez y la persistencia de su transexualidad», ha detallado.

* * *

DURANTE SU VISITA A BOGOTÁ

Sánchez se parte de risa tras ser presentado ante Petro como «presidente de la República de España»

El «lapsus», según el equipo de Petro, se produce días después de que le afearan a Felipe VI no levantarse ante la espada de Simón Bolívar. El verdadero Simón Bolívar: mal estratega militar, sádico con sus enemigos y mujeriego hasta el final. Felipe VI engrandece a España y retrata el narcoindigenismo de Podemos

- **Joan Guirado** (OKdiario)



«Bienvenido el presidente del Gobierno de la República de España». Así han dado la bienvenida a Pedro Sánchez –que se ha reído–, en el palacio presidencial de Bogotá, cuando se disponía a comparecer junto al presidente del país Gustavo Petro en la sala Simón Bolívar. El «lapsus», según el equipo del mandatario colombiano, se produce días después de las críticas vertidas desde el país y desde la izquierda en España contra Felipe VI por no levantarse al paso de la espada de Simón Bolívar durante la toma de posesión de Petro.

La forma en la que la presentadora del acto ha saludado al jefe del Ejecutivo español ha provocado murmullos y risas por parte de la amplia delegación

gubernamental que acompaña a Sánchez en su gira por Iberoamérica, alrededor de unas 25 personas, así como de los periodistas españoles que han viajado con él. El mismo presidente se ha sumado a esas risas, que han durado apenas unos segundos, a la vez que se hacía el silencio. Posteriormente, han vuelto a presentar a los dos mandatarios de forma correcta.

Tras esa segunda presentación, precisamente, Gustavo Petro ha querido res-



tar hierro al asunto enfatizando que Sánchez era el «presidente del Gobierno del reino de España». Lo ha hecho al principio y al final de su intervención –momento en el cual, por el tono usado, se han vuelto a escuchar algunas risas discretas en la sala en la que compartían los dos presidentes–.

Pero este error, según manifiesta el gabinete de Gustavo Petro, que supone una

incidencia protocolaria garrafal a nivel diplomático, no es una anécdota en las visitas que Pedro Sánchez realiza a nivel internacional para representar a España. Y siempre, como hoy, los protagonistas se ríen o tratan de quitar importancia a unos gestos que, aunque puedan ser errores humanos, tienen una trascendencia especial.

Cabe recordar, sin ir más lejos, lo que ocurrió hace unos meses durante la reunión que mantuvo con el rey Mohamed VI en el Palacio Real de Rabat. Los servicios de protocolo de la Corona de Marruecos colocaron la bandera española boca abajo durante la cena del Iftar (descanso del ayuno). Nadie de Moncloa, que revisa todos los detalles al milímetro, dio orden de corregir esa anomalía. Pues una bandera boca abajo, no es una cosa nimia, ni sin importancia; tiene su significado y además, es uno de los más importantes. Es símbolo de humillación o resignación hacia las posiciones predominantes de otros.

* * *

La Ley cerca a Pedro Sánchez para que aclare el origen del conflicto con Marruecos y Argelia

El Gobierno esconde quién y cómo dejó entrar a Ghali y acumula varapalos legales por su opacidad mientras ultima una Ley de Secretos para evitar dar explicaciones sobre todo ello

Antonio R. Naranjo (*El Debate*)

Hace apenas unos días, Mohamed VI se vanaglorió de haber logrado que Pedro Sánchez le conceda de algún modo la autoridad plena sobre el Sáhara. Es el penúltimo episodio de una larga historia de volantazos, penumbras y quizá hasta espionajes que comenzó hace 15 meses con una persona y su misteriosa llegada a España.

Todo empezó en la primavera de 2021, mucho antes de que Rusia invadiera Ucrania y el precio del gas y la inflación se dispararan. Fue entonces cuando el Gobierno empezó a dinamitar sus relaciones con Marruecos y Argelia, clave en el entuerto que ahora alimenta una crisis energética histórica por la reducción, de hasta un 45 %, del suministro de gas argelino y el crecimiento de un 15 %, paradójicamente, de los envíos desde Moscú.

En mayo de aquel año, un personaje desconocido para la opinión pública entró en España de manera clandestina, supuestamente para tratarse una dolencia grave en un hospital de La Rioja. Era Brahim Ghali, líder del Frente Polisario del Sáhara, un héroe para Argelia y un terrorista para Marruecos que Sánchez trató con honores diplomáticos, una exquisita hospitalidad sanitaria y un secretismo que saltó por los aires al enterarse Rabat.

En ese episodio, a partir de ahí, se concentran las grandes lagunas y penumbras del Gobierno, domésticas e internacionales, en un puzle donde aparecen todos los trucos y todas las consecuencias



del manual de supervivencia de Sánchez: desde el uso abusivo del secreto de Estado que ahora quiere cambiar por una nueva Ley que garantice su opacidad hasta el inexplicable volantazo en su relación con Argel y Rabat, con el caso Pegasus y el espionaje al propio presidente entre medias.

Y lejos de contribuir a aclararlo, Sánchez se ha acantonado en las sombras para emborronar todas y cada una de las escenas de esa película de terror y misterio que se proyecta en varias pantallas, todas en realidad conectadas.

De todo ello da cuenta un documento, obtenido por *El Debate*, que evidencia el antagonismo entre lo que Sánchez dice en público y lo que en realidad hace en privado, resumido en ese presidente que la semana pasada exigía a los medios de comunicación que no «intoxicaran» mientras él, de puertas hacia adentro, enmaraña los grandes asuntos de Estado para diluir la gestión que de ellas hace.

O mientras comparece para presumir de sus nuevas relaciones con Marruecos, que incluyen la cesión unilateral del Sáhara sin respaldo del Congreso, se lava las manos ante la Justicia para aclarar por qué dejó entrar a Ghali en España y le carga el mochuelo a los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Interior, que a su vez se niegan a atender las instrucciones legales que les obligan a aclararlo todo.

Así figura en el documento oficial que hoy publica en exclusiva este periódico, en el que el Ministerio de Presidencia asegura no tener documentación alguna sobre la llegada de Ghali a España y carga en Albares y Marlaska una responsabilidad que todos ellos rechazan, pese a que en los tres casos el Consejo de Transparencia ha fallado en su contra, obligándoles en balde a dar explicaciones, y un juzgado de Zaragoza instruye el caso.

Sánchez se lava las manos

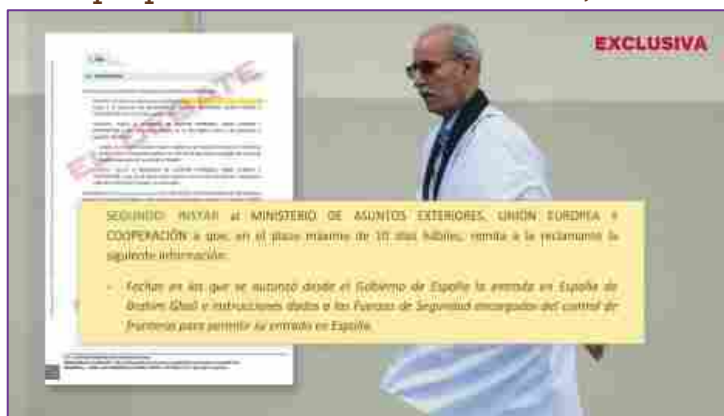
De este documento, fechado en junio del año pasado, deriva una nueva resolución del Consejo de Transparencia, la 78/2022, por la que una vez más la máxima autoridad independiente en materia de Transparencia otorga su amparo a este periódico. Este es un hecho fundamental ahora que además Pedro Sánchez pretende con su nueva regulación privar a los medios de comunicación de su derecho constitucional a informar libremente, reforzando así el derecho a saber de la ciudadanía.

«No existe documentación alguna en el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática», reconoce por escrito Salvador Laco C Cisneros, director del Gabinete del Subsecretario de Félix Bolaños, que a la vez intenta cargarle el mochuelo a Exteriores, Interior y a «la Comunidad de la Rioja».

Un modus operandi casi calcado al que también perpetraba su homólogo en Exteriores en otro documento en propiedad de El Debate. En éste, Luis Manuel Cuenca, subsecretario de Albares, repite el intento de escurrir el bulto con un argumento alternativo, apelando a la judicialización de caso como excusa para esconder la información: «La entrada en España de Brahim Ghali es objeto de investigación en el Juzgado de Instrucción nº 7 de Zaragoza», con el expediente de diligencias previas 1281/2021. Y lo hacen todos a sabiendas de que los dos Ministerios y el Gobierno ya están en situación legal de rebeldía, pues ambos han sido instados ya formalmente a dar cuentas a *El Debate* sobre la «Operación Ghali» que dinamita aún en la actualidad las relaciones con Marruecos, y ambos han desobedecido, simplemente, lo mandado por el Consejo de Transparencia, sin interponer recurso ante los tribunales. Este es el fraude de ley del que se sirve Moncloa.

Es decir, con la misma mezcla de opacidad y falta de explicaciones, Sánchez deja entrar al gran amigo de Argelia y meses después, tras ser espiado, da un volantazo y «regala» el Sáhara a Marruecos, y todo ello sin pasar por el Parlamento, ignorando las imposiciones firmes de instancias legales y a la vez intentando lavarse las manos.

En este caso, como en los anteriores con Marlaska y la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, que asimismo también incumple hasta en dos ocasiones lo mandado por el CTBG, es ahora a Albares a quien le toca dar cuentas, a pesar de su resistencia amparándose en las investigaciones en curso de un juzgado de Zaragoza, sobre este espinoso asunto, y todo ello tras ser señalado directamente por Pedro Sánchez.



Una demoledora resolución, con número de serie 78 /2022, desmonta al Gobierno en varios frentes y ampara el derecho de *El Debate* a recibir la información exacta de las instrucciones dadas por Sánchez para acoger en España al líder Polisario.

En la misma, se deniega el supuesto «carácter confidencial» de la operación; se rechaza que la instrucción de una causa penal en un juzgado de Zaragoza le impida al Gobierno detallar todo lo que ocurrió con Ghali y se recalca una conclusión que desmonta el espíritu y la letra de la próxima Ley de Secretos Oficiales que Sánchez quiere aprobar para declarar confidencial todo lo que le interese: «Repetimos (...), no ha quedado acreditado».

Es decir, el Gobierno de Sánchez acumula ya tres varapalos legales por proteger al «Señor X» de la operación que dinamitó 50 años de posición española en el Sáhara; introdujo un extraño episodio de espionaje internacional al Presidente;

suspendió las relaciones comerciales y el suministro fluido de gas con Argelia y ha provocado, entre otros casos similares, una ofensiva del Gobierno para acabar con la difusión de noticias como ésta, impulsando una ley que castigaría con sanciones millonarias la publicación de toda información clasificada por Moncloa como confidencial, con el mismo Bolaños que esconde las claves de Ghali al frente de la ofensiva gubernamental contra la libertad de informar.



suspendió las relaciones comerciales y el suministro fluido de gas con Argelia y ha provocado, entre otros casos similares, una ofensiva del Gobierno para acabar con la difusión de noticias como ésta, impulsando una ley que castigaría con sanciones millonarias la publicación de toda información clasificada por Moncloa como confidencial, con el mismo Bolaños que esconde las claves de Ghali al frente de la ofensiva gubernamental contra la libertad de informar.

Cabe recordar que, para terminar de las «bombas de humo» que lleva lanzando el Gobierno para enmarañar la situación, el pasado junio *El Debate* reveló que Pedro Sánchez no informó formalmente al Rey de España de su decisión, personalísima y sin respaldo de las Cortes, de variar medio siglo de postura española en el Sáhara y concederla a Marruecos la tutela del enclave, solo meses después de que fuera espiado, tal vez por la inteligencia de Mohamed VI.

La tormenta con Argelia

Así se deducía de la documentación que revelada por *El Debate*, tras meses de investigación y en plena tormenta internacional con Argelia, que muestra cómo desde antes del giro con Rabat, y pese a las represalias de Marruecos con Ceuta por acoger hace un año al líder del Frente Polisario, Moncloa no hizo partícipe a La Zarzuela de las personalísimas decisiones de Sánchez pese a la espléndida relación de Felipe VI, y de Juan Carlos I, con su «primo» alauí.

Y si lo hizo, se niega a explicarlo por razones desconocidas que prolongan las sospechas sobre un drama internacional en tres actos: en el primero, Sánchez permitió la entrada en España de Brahim Ghali, líder de Polisario y aliado confeso de Argelia en su largo pulso contra Marruecos. En el segundo fue espiado el presidente, sin que nunca desmintiera la responsabilidad de Rabat en los hechos.

Y en el tercero, Sánchez aceptó concederle a Mohamed VI la mayor jerarquía que nunca soñó sobre la excolonia, sin recibir a cambio nada: Ceuta y Melilla, e incluso Canarias, siguen sin recibir de Rabat el reconocimiento a su espa-



ñolidad, nunca asumida por el reino alauí y ahora objeto de una crisis diplomática con Argel de incalculables consecuencias que entre otras cosas le obliga a España a comprarle a Putin más gas que antes de la guerra.

La rebeldía de Sánchez no es nueva a la hora de despejar si

mantuvo al Rey Felipe informado de esta crisis cuyo fin parece lejano en el tiempo.

Moncloa insiste de nuevo en negarse a dar información pública alguna sobre el plan de autonomía del Sáhara y de sus «ideas importantes para la nueva relación entre los reinos de España y Marruecos», según las palabras del propio Sánchez.

En un documento que obra en exclusiva en poder de *El Debate*, desde Secretaría General de Presidencia se afirma incluso el «conocimiento y divulgación» de cualquier intercambio de posiciones entre Zarzuela y Moncloa tendría «consecuencias directas inmediatas en las relaciones internacionales de nuestro país», sin precisar por qué y en contraste con las que sí ha tenido ya el cambio de postura unilateral de Sánchez en el Sáhara.

* * *

Lo que hicieron los romanos

DMAX está emitiendo de nuevo la serie documental «Megaestructuras franquistas»

Hughes (ABC)

Probada la ley de memoria democrática casi sorprende que se vuelva a emitir la serie «Megaestructuras franquistas» (martes por la noche en DMAX). Aunque su punto de vista no sea en absoluto celebratorio algunas mentalidades podrían considerar que el repaso a las infraestructuras franquistas resulta apologético por lo fácilmente que puede inducir a situaciones parecidas al chiste de los romanos de Monty Python:

-Estos malditos franquistas nos dominaron, pero ¿qué hicieron por nosotros?

-Embalses

-Sí, lo reconozco, hicieron embalses

-E industrias

-...

-Grandes astilleros, barcos...

-Aumentaron empleo y salarios

-... y construyeron hospitales

- ¡Y qué! Además de eso, ¿qué más?

-Bueno, y se podía caminar por la noche y...

-¡Ya está bien! Pero aparte de los embalses, la industria, el empleo, los buques, la seguridad y los hospitales, ¿qué? ¿Qué hicieron?».

Pues además, y según cuenta esta serie documental, desarrollar la energía nuclear, una preocupación que, como otras tantas, generó un desarrollo científico derivado. España se convirtió en la tercera potencia nuclear mundial dejando más de diez centrales y el Proyecto Islero, que pudo ser la bomba española.



La serie repasa estos hitos del franquismo sin profundizar en el sentido

de su realización. Se menciona el Estado de Obras, la legitimación de la dictadura por las infraestructuras, pero no más. Las iniciativas energéticas, militares e industriales revelan una preocupación final por la soberanía, un racionalismo ingenieril y un innegable desarrollismo; a su modo, el Régimen era «progresista», de un progresismo económico y desarrollista.

Esas megaestructuras quedaron y forman parte del paisaje, pero ahora se encuentran amenazadas por la dinamita un poco talibana del segundo giro transitivo del régimen setentayochil: los embalses, las centrales nucleares y hasta la gran cruz del Valle de los Caídos han volado o pueden volar por los aires. Verlas hoy, aunque sea por televisión, es como observar los restos que dejó otra civilización.

* * *